

Auto No. AI-072
Proceso: Verbal
Demandante: Carolina de la Espriella Álvarez
Demandado: Iván Alejandro Correa y Otros
Radicado: 05129 31 03 001 2020 00118 01
Asunto: Confirma auto que decretó el desistimiento tácito.
Inacción de la parte demandante en el cumplimiento de las cargas procesales deviene la terminación del proceso por desistimiento tácito, en los supuestos del numeral 2 del artículo 317 del C.G.P.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, Once (11) de Agosto de dos mil veintitrés (2023).

Procede la Sala a proveer de mérito el recurso de apelación interpuesto a través de apoderado judicial por la parte demandante -Carolina de la Espriella Álvarez- en contra del auto proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Caldas, el diecisiete (17) de abril del año en curso, mediante el cual se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito al interior del proceso verbal incoado por aquella en contra de Iván Alejandro Correa Vélez, Carlos Alberto Gómez Rivera y Jorge Mario Restrepo Londoño.

I. ANTECEDENTES.

1. Supuestos fácticos vinculados al presente caso. Como hechos relevantes con miras a desatar la alzada, se tiene que, la señora Espriella Álvarez a través de apoderado judicial, presentó acción verbal en contra de los citados demandados, peticionando: **(i)** la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre un lote de terreno tomado de otro de mayor extensión identificado con M.I No 001-1330054, **(ii)** la inscripción de la sentencia en folio de matrícula inmobiliaria, **(iii)** y la respectiva protocolización.

El Juzgado Civil del Circuito de Oralidad de Caldas en providencia del diecisiete (17) de septiembre del dos mil veinte (2020) admitió la demanda y ordenó las siguientes cargas procesales: **(i)** notificación del demandado conforme a lo previsto en los artículos 291 y 292 del C.G.P o en el caso de notificación electrónica, tal y como lo dispone el artículo 8 del Decreto 806 del 2020, **(ii)** emplazamiento de las personas indeterminadas en los términos de los

artículos 108 y 375 del C.G.P **(iii)** la instalación de una valla conforme a lo dispuesto en el artículo 375 ibidem **(iv)** Inscripción de la demanda en el registro de instrumentos públicos **(v)** informar la existencia del proceso a la Superintendencia de Notariado y Registro, Incoder, Uariv e Igac.

3. Del auto impugnado. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Caldas profirió auto el diecisiete (17) de abril del año en curso, en la que declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito, bajo el argumento que ha transcurrido más de un (1) año desde la última actuación del proceso en absoluta inactividad, pues no fue aportada la constancia de inscripción de la demanda en el certificado de libertad y tradición del bien objeto de usucapión.

4. De la alzada. En la oportunidad procesal pertinente, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación en contra del anterior proveído, aduciendo -a manera de síntesis-, que no había cumplido con la carga de inscripción de la demanda porque a la fecha el Juzgado no ha remitido el oficio a la Oficina de Instrumentos Públicos, en el que se ordenó la inscripción de la demanda, en el sentido que solo ha remitido los oficios aclaratorios, pero no el que decretó la medida. Razón suficiente para acreditar que la inactividad del proceso se debe a un actuar a cargo del Despacho y no a las partes.

Expuestos de esta forma los antecedentes que dieron lugar a la decisión recurrida y las razones en que se sustenta la alzada, procede la Sala a desatar el recurso formulado, con fundamento en las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Del desistimiento tácito. Sea lo primero indicar que el desistimiento tácito, como figura procesal, se encuentra regulado en el Código General del Proceso, artículo 317, concebido como una forma anormal de terminación del proceso, imponible a título de sanción procesal cuando se acredita la inactividad de la parte a cuya instancia se promovió un trámite o proceso, que se paraliza por su causa.

Conviene decir que, el desistimiento tácito, es pues un instituto claramente inspirado en el principio dispositivo que informa al procedimiento civil, una de cuyas consecuencias más significativas es el impulso del proceso a instancia de parte. Por ello, solamente cuando la paralización del trámite se debe a la exclusiva negligencia o aquietamiento de las partes y no al incumplimiento de los deberes de impulso procesal oficioso, fue conferida la facultad al órgano judicial para proceder aún de oficio a decretar el desistimiento tácito del proceso.

Es decir, que para que se configure el desistimiento tácito, dicha inacción procesal ha de provenir de las partes y **nunca puede depender del juez**, puesto que, si se admite que la simple inactividad suya pudiera producir la extinción del proceso, se estaría dejando al arbitrio de los órganos judiciales la suerte de los derechos de los coasociados. En verdad, la desidia de los encargados de impartir justicia no puede descargarse sobre el demandante que ha hecho las gestiones que le corresponden para la marcha de la actuación.

Así pues, el desistimiento tácito tiene por finalidad imprimir seriedad, eficacia, economía y celeridad a los procedimientos judiciales, en la medida que permite racionalizar la carga de trabajo del aparato de justicia, dejando en manos de los órganos competentes la decisión de aquellos asuntos respecto de los cuales las partes no muestran interés en su resolución, en razón del cumplimiento de las cargas procesales que les ha impuesto la legislación procedimental.

2.2. Para el caso, la decisión adoptada por el *a quo*, según la actuación a la que se hizo alusión, es autorizada por el numeral 2, inciso C), del artículo 317 del Código General del Proceso, el cual consagra expresamente que:

"2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas "o perjuicios" a cargo de las partes."

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;"

2.3 Frente a la procedencia del desistimiento tácito en el caso en mención, resulta diciente la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, en sede de tutela STC4639 del 17 de mayo de 2023 Magistrado Ponente: Luis Alonso Rico Puerta, en la que se reiteró la línea jurisprudencial que ha adoptado la Corte en torno a la aplicación del Desistimiento tácito, la que a continuación me permito citar:

En ese contexto, no merecieron ningún reparo por parte del tribunal los precedentes jurisprudenciales referidos por el aquí censor, específicamente, la sentencia CSJ STC11191-2020, 9 dic., en la cual esta Corporación aclaró, entre otros aspectos –de relevancia para el sub-lite– que:

«Por regla general, los procesos deben terminar una vez se haya definido la situación jurídica en virtud de la cual fueron promovidos, bien mediante una sentencia, o a través del desarrollo de actuaciones posteriores a ella dirigidas a satisfacer el derecho pretendido. No obstante, el legislador autorizó a los jueces a culminarlos antes de que ello suceda, en el evento en que se paralicen porque una de las partes no realizó la «actuación» de la que dependía su continuación, o por cualquier otra razón. Es así como el numeral 1° del artículo 317 del Código General del Proceso prevé que se tendrá por «desistida la demanda», cuando el postulante, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la providencia que lo requiera, no cumpla con la «carga procesal» que demande su «trámite».

El numeral 2°, por su parte, estipula que dicha consecuencia procede, cuando el «proceso» «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación (...).».

Y la misma disposición consagra las reglas, según las cuales «[s]i el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto (...) será de dos (2) años (literal b), y que «[c]ualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo» (literal c).

El último de tales preceptos es uno de los más controvertidos, como quiera que hay quienes sostienen, desde su interpretación literal, que la «actuación» que trunca la configuración del fenómeno es «cualquiera», sin importar si tiene relación con la «carga requerida para el trámite» o si es suficiente para «impulsar el proceso», en tanto otros afirman que aquella debe ser eficaz para poner en marcha el litigio. (...)

2.- Es cierto que la «interpretación literal» de dicho precepto conduce a inferir que «cualquier actuación», con independencia de su pertinencia con la «carga necesaria para el curso del proceso o su impulso» tiene la fuerza de «interrumpir» los plazos para que se aplique el «desistimiento tácito». Sin embargo, no debe olvidarse que la exégesis gramatical no es la única admitida en la «ley». Por el contrario, como lo impone el artículo 30 del Código Civil, su alcance debe determinarse teniendo en cuenta su «contexto», al igual que los «principios del derecho procesal».

Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: (...) cuando el derecho procesal en su conjunto, percibido por lo tanto en su cohesión lógica y sistemática cual lo exige el Art. 4 de la codificación,

denota con claridad suficiente que determinada regla debe tener un alcance distinto del que había de atribuírsele de estarse únicamente a su expresión gramatical, es sin duda el primero el que prevalece (...). La ley constituye un todo fundado en ideas básicas generales, articulado según determinados principios de ordenamiento, y que a su vez está ubicado en el ordenamiento jurídico global. La tarea de la interpretación sistemática consiste en asignar a cada norma dentro de ese todo y de ese ordenamiento global, el lugar que le corresponde según la voluntad reconocible de la ley y extraer de esa ubicación conclusiones lógicas sobre el contenido de la misma...' (AC 8 abr. 2013, rad. 2012-01745- 00)».

Así mismo, en la reseñada providencia se dejó sentado que, en tanto que el desistimiento tácito busca solucionar la «parálisis» de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, «la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para que se «decrete su terminación anticipada», **es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer**», previsión que, aunque fue aducida por el memorialista, no fue tomada en cuenta de cara a la resolución del recurso.

En línea con ello, en la decisión que viene de memorarse se recalcó que: **«En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha»** (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020).

Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento».

Como en el numeral 1º lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término.

En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el «proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo. Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la «secretaría del juzgado» por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la anualidad con el «emplazamiento» exigido para integrar el contradictorio.

Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada. Lo dicho, claro está, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194/2008), en cuanto a que el «desistimiento tácito» no se aplicará, cuando las partes «por razones de fuerza mayor, están imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (...)».

De la cita precedente, se extrae que, en el supuesto de que el expediente permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación, que cumpla en el proceso la función de impulsarlo, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo, como sería el caso del emplazamiento, salvo que por razones de fuerza mayor, las partes estén imposibilitados para cumplir con sus deberes procesales con la debida diligencia¹.

3. Caso en concreto. Para el caso objeto de estudio, debe ser elemento angular del análisis la etapa procesal establecer si efectivamente el proceso se encontraba inactivo por más de 1 año, contado a partir de la notificación de la última actuación, que, según el Juzgado, corresponde a la actuación del 10 de noviembre del 2021 en donde se comunicó la medida de inscripción de la demanda o, si, en su defecto, le asiste razón al recurrente, al señalar que la inactividad obedeció a que la célula judicial no ha remitido los oficios que le requirió la Oficina de Instrumentos Públicos.

Bien, para resolver el anterior planteamiento, bastará realizar un seguimiento cronológico de las actuaciones que se han surtido al interior del plenario para establecer si efectivamente la inactividad deviene del Juzgado o corresponde a la parte recurrente ante la falta de diligencia en el cumplimiento de las cargas procesales impuestas.

En efecto, se observa que en oficio No 230 del 27 de octubre del 2020 la dependencia judicial comunicó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín la medida de inscripción de la demanda sobre el inmueble de folio de M.I No 001-779144 (*CdoDigital17oficio230*), seguidamente, en oficio No 231 del 3 de noviembre de ese año, aclaró el folio de matrícula en el que recae la medida cautelar (*CdoDigital18OficioAclaratorio*), información que reiteró nuevamente en oficio No 235 del 11 de esa mensualidad (*CdoDigital19OficioAclaratorio*). En nota devolutiva de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, se requirió al actor para que cumpliera con el pago de los derechos de registro. En memorial del 8 de junio del 2021, el apoderado a fin de

¹ STC11191-2020, 9 diciembre.

cumplir con dicha carga, solicitó al juzgado que comunicara el oficio No 230 del 27 de octubre, por medio del cual comunicó la medida (*CdoDigital54Memorial290621*), petición que fue aceptada en providencia del 20 de junio del 2021 y, en consecuencia, en oficio 119 del 30 de julio se informó a la Oficina de Registro la inscripción de la medida (*CdoDigital56Oficio*). Comunicación que se materializó mediante correo electrónico del pasado 10 de noviembre del 2021 (*CdoDigital60Oficio*), sin que, desde esa fecha, se advierta actuación alguna por parte del actor.

Conforme a lo expuesto, teniendo en cuenta que han transcurrido más de dos (2) años desde la fecha la última actuación, la sanción fijada por el Juez en providencia del 17 de abril del 2023, resulta plenamente procedente ante la inacción de la parte actora de cumplir con las cargas procesales impuestas.

En ese orden de ideas, no luce arbitraria o antojadiza la decisión adoptada por el operador cognoscente, en tanto se acompasa con un respaldo legal en torno al tema debatido, debiéndose concluir por la Sala de Decisión que, en efecto, es posible dar aplicación a la consecuencia jurídica ya advertida, esto es, la terminación del proceso por desistimiento tácito ante la inacción de la parte interesada.

De esta manera y por las razones expuestas, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, en Sala Unitaria de Decisión Civil,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha del diecisiete (17) de abril del dos mil veintitrés (2023), emitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Caldas, por las razones expuestas de manera precedente.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas por cuanto las mismas no se causaron.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE,

**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
MAGISTRADO**

Firmado Por:

Julian Valencia Castaño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4a15cedbc2d38098db5829b1d6dbfe4410422770cb336df2a070e56bcf8240af**

Documento generado en 11/08/2023 10:14:42 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>